



JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE GRANADA - META

Granada-Meta, treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021)

OBJETO A DECIDIR

Procede el despacho a resolver lo que en derecho corresponda dentro de la acción de tutela promovida por **LEIDY MARITZA MARTINEZ BOHORQUEZ** actuando en nombre propio contra **ANA SILVIA LOAIZA GOMEZ** Representante Legal de la **VEEDURIA POR LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES GRANADINAS**, por considerar vulnerado su derecho fundamental de petición, debido proceso, vida digna e igualdad.

IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE

Se trata de **LEIDY MARITZA MARTINEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía N°. 1.120.376.852, recibe notificaciones en la Manzana 4 Casa 17, Barrio Ciudadela de la Sabana en Granada Meta, Celular 314 436 52 54 y por medio del correo electrónico: lara0230@gmail.com

IDENTIFICACIÓN DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADO

La presente acción de tutela está dirigida contra **ANA SILVIA LOAIZA GOMEZ** Representante Legal de la **VEEDURIA POR LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES GRANADINAS**, quien recibe notificaciones en la Carrera 13 N°. 33 – 09, Barrio Juan Bosco en la Ciudad de Granada Meta, y por medio del correo electrónico: veeduriamujeresgranda@gmail.com – anasilvia loaiza8@gmail.com

LOS HECHOS.

Relata la accionante que presentó derecho de petición el 04 de mayo de 2021, a la representante legal de la veeduría por la dignidad de las mujeres granadinas, por medio del cual solicitaba:

- “1. Se me informe por medio de escrito sobre las actuaciones realizadas por ustedes, en cuanto al libre proceso sobre el caso de la señora YEIMMY PAOLA BELTRAN LONDONO.*
- 2. Hacerme allegar el proceso por escrito, donde ustedes como veeduría de la mujer han brindado las garantías posibles para que el proceso tenga un tránsito armonioso en las entidades legales competentes.*
- 3. Informar por escrito cuales han sido las medidas que la veeduría de la mujer ha tomado para escucharme y poder emitir un concepto sin sesgos, ni intereses personales.*
- 4. ustedes como veeduría de la mujer han faltado a su naturaleza jurídica el cual, es “velar por los derechos de las mujeres” siendo*



vulnerado mi condición al ser mujer también, quiero denunciar que me he sentido acosada, violentada psicológicamente, desprotegida por su entidad, ya que al día de hoy nunca he recibido una invitación para escuchar mis argumentos y poder de esta manera emitir un concepto que favorezca la integridad y dignidad de ambas mujeres involucradas en los acontecimientos.

5. Informar mediante documento escrito cuales son los protocolos que la veeduría por la dignidad de las mujeres granadinas, activa cuando atiende un caso en el que se encuentra involucrado familiares o allegados de los miembros activos y colaboradores y/o voluntario de la veeduría.

6. Informar mediante documento escrito cual fue el mecanismo para determinar que en este caso la víctima es la señora PAOLA BELTRAN LONDOÑO, desprotegiendo a otra mujer LEIDY MARITZA MARTINEZ y vulnerando mi derecho a la orientación y transparencia que ustedes como

veeduría deben de brindar en todos los casos que atienden, teniendo en cuenta el artículo 9 y 13 de la Ley 850 de 2003.

7. Informar mediante documento escrito que medidas han tomado dentro de su organización para que realicen un acompañamiento imparcial sobre el caso y por consiguiente realizar un seguimiento interno a la señora Viviana Palacios al ser involucrados sus familiares en atentados en contra de la mujer, teniendo en cuenta que ella debe propender a la protección de los derechos de las mujeres.

8. Exijo que públicamente la “veeduría por la dignidad de la mujer granadina” al encontrarse realizando un mal proceder en contra de mi integridad moral y social, se retracten de las acusaciones emitidas ante la Alcaldía de Granada Meta, Secretaria de la Mujer e Inclusión Social de Granada, secretaria de la Mujer, la Familia y Equidad de Género de la Gobernación del Meta, Defensoría del Pueblo, Procuraduría general de la Nación.

9. Por ultimo solicitar a la “veeduría por la dignidad de las mujeres granadinas” sus documentos donde acrediten ser una entidad legalmente constituida, tenido en cuenta el artículo 14 de la ley 850 de 2003. “

De lo anterior, solicita se le reconozca y ampare su derecho fundamental de petición.

ACTUACION PROCESAL Y COMPETENCIA

Mediante auto de fecha 21 de junio de 2021, el juzgado asume el conocimiento de la acción de tutela, admitiéndose y notificándose en debida forma.

Este despacho es competente para conocer en primera instancia de la presente acción de tutela, de conformidad con el artículo 86 de la

Constitución Política de Colombia, art. 37 y 42 Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.



RESPUESTA DE LOS ENTES ACCIONADOS

La Representante Legal de la Veeduría por la Dignidad de las mujeres Granadinas, guardo silencio al presente trámite constitucional.

CONSIDERACIONES

La acción de tutela fue concebida en el artículo 86 Superior, como la herramienta idónea para el amparo de los derechos fundamentales ante su transgresión o amenaza por parte de entes públicos o privados. De esta forma, el ciudadano puede recurrir a la administración de justicia en busca de la protección efectiva de sus derechos, respecto de lo cual el juez constitucional deberá impartir una orden dirigida a conjurar la vulneración a que cese la prolongación de sus efectos en el tiempo.

El problema jurídico a resolver se concreta en establecer si existió vulneración del derecho fundamental de petición por parte de la Representante Legal de la Veeduría por la Dignidad de las mujeres Granadinas, al no contestar oportunamente la solicitud presentada el 04 de mayo de 2021.

PRECEDENTE CONSTITUCIONAL

El artículo 23 de la Constitución Política de 1991 consigna que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y obtener una pronta resolución. El derecho de petición es fundamental por sí mismo y, a través de él, se ejercen otros derechos constitucionales como el debido proceso, la salud, la educación, el trabajo, el acceso a la administración de justicia, entre otros.

El derecho de petición puede ser interpuesto ante particulares y autoridades públicas, la importancia respecto de éstas últimas radica en que, a través de éste, se coloca a la administración en funcionamiento, se exige el goce de distintas prerrogativas y se accede a la información, es por esta razón, que dentro de sus garantías se encuentran (i) la pronta resolución del mismo, es decir que, la respuesta debe entregarse dentro del término legalmente establecido para ello y, (ii) la contestación debe ser clara y efectiva respecto de lo pedido, de tal manera que, permita al peticionario conocer la situación real de lo solicitado.

Sobre el tema existe abundante jurisprudencia, en la que se ha definido los conceptos básicos y mínimos que componen este derecho, así como su núcleo esencial; sobre este último aspecto se ha manifestado que el mismo radica en la resolución integral de la solicitud, de manera que se atienda lo pedido, sin que ello signifique que la solución tenga que ser positiva. Al respecto, esta Corporación ha dicho que:

“... una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario, es efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea; y es congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución a lo pedido verse sobre lo preguntado y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la



petición, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre relacionada con la petición propuesta.

En otras palabras, el goce efectivo del derecho de petición implica que exista una contestación que resuelva efectivamente lo pedido, sin que implique que la respuesta corresponda a lo solicitado, puesto que la misma puede ser negativa siempre que sean claras las razones por las cuales no se accede a lo petitionado, dicho de otra manera, no puede ser evasiva o abstracta. De la misma forma, el núcleo esencial del derecho fundamental en comento requiere que la respuesta sea oportuna, por lo que debe encontrarse dentro del término legalmente establecido para ello.

Las entidades públicas y algunas entidades privadas, como es el caso de aquellas que se encargan de la prestación de algún servicio público, están especialmente obligadas a cumplir a cabalidad las normas relativas a este derecho fundamental, puesto que como se comentó en párrafos anteriores mediante éste se garantizan otros derechos constitucionales.

El treinta (30) de junio de dos mil quince (2015), el legislador expidió la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual reguló el ejercicio del derecho de petición, norma en la que se reglamentó el mandato establecido en el artículo 23 de la Constitución.

Tratándose de Ley Estatutaria, la Corte ejerció un control previo automático a través de la sentencia C-951 de 2014, providencia en la que se pronunció sobre la constitucionalidad de la norma. En efecto, en esa oportunidad la Sala Plena de esta corporación analizó el procedimiento, pero también el contenido de esta de cara a la Constitución. Sobre los artículos 32 y 33, esta Corte consideró que se ajustaban a la Carta, en tanto que desarrollaban el mandato contenido en el artículo 23.

Mediante el ejercicio del derecho fundamental de petición resulta posible solicitar el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, *formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos*".

Así mismo el artículo 13, se aclaró que **Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo.** Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: *el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.*

Se ha señalado que su *núcleo esencial* reside en una resolución *pronta y oportuna* de la cuestión que se pide, lo cual no necesariamente implica una respuesta afirmativa a la solicitud. Se entiende que este derecho está protegido y garantizado cuando se obtiene una contestación oportuna, de fondo, clara, precisa, congruente y la misma es puesta en conocimiento del peticionario. **El incumplimiento de cualquiera de estas características envuelve su vulneración por parte de la autoridad o del particular.**¹

En ese orden de ideas el Decreto Ley 491 de 2020 por el cual se adoptan las medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de



las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica señala:

“Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así:

Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: (i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción. (ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo.

En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales.”

Ahora bien, en cuanto a la **presunción de veracidad en materia de tutela cuando la autoridad demandada no rinde el informe solicitado por el juez constitucional** la Corte H. Constitucional en la Sentencia T-517 de 2010, señala:

“El artículo 20 del Decreto-Ley 2591 de 1991, consagra la presunción de veracidad como un instrumento para sancionar el desinterés o negligencia de la autoridad pública o el particular contra quien se ha interpuesto la acción de tutela, en aquellos eventos en los que el juez requiere cierta información (art. 19 Decreto 2591 de 1991) y aquella no es allegada dentro del plazo respectivo o simplemente no llega, dicha negligencia tiene como consecuencia que los hechos narrados por el accionante en la demanda de tutela sean tenidos como ciertos.”

CASO CONCRETO

Se tiene que efectivamente la señora Leidy Maritza Martínez Bohórquez, radico petición el 04 de mayo de 2021, ante la Veeduría por la dignidad de las mujeres Granadinas, por medio del cual solicitaba:

- “1. Se me informe por medio de escrito sobre las actuaciones realizadas por ustedes, en cuanto al libre proceso sobre el caso de la señora YEIMMY PAOLA BELTRAN LONDONO.*
- 2. Hacerme allegar el proceso por escrito, donde ustedes como*



veeduría de la mujer han brindado las garantías posibles para que el proceso tenga un tránsito armonioso en las entidades legales competentes.

3. informar por escrito cuales han sido las medidas que la veeduría de la mujer ha tomado para escucharme y poder emitir un concepto sin sesgos, ni intereses personales.

4. ustedes como veeduría de la mujer han faltado a su naturaleza jurídica el cual, es “velar por los derechos de las mujeres” siendo vulnerado mi condición al ser mujer también, quiero denunciar que me he sentido acosada, violentada psicológicamente, desprotegida por su entidad, ya que al día de hoy nunca he recibido una invitación para escuchar mis argumentos y poder de esta manera emitir un concepto que favorezca la integridad y dignidad de ambas mujeres involucradas en los acontecimientos.

5. Informar mediante documento escrito cuales son los protocolos que la veeduría por la dignidad de las mujeres granadinas, activa cuando atiende un caso en el que se encuentra involucrado familiares o allegados de los miembros activos y colaboradores y/o voluntario de la veeduría.

6. Informar mediante documento escrito cual fue el mecanismo para determinar que en este caso la víctima es la señora PAOLA BELTRAN LONDOÑO, desprotegiendo a otra mujer LEIDY MARITZA MARTINEZ y vulnerando mi derecho a la orientación y transparencia que ustedes como Veeduría deben de brindar en todos los casos que atienden, teniendo en cuenta el artículo 9 y 13 de la Ley 850 de 2003.

7. Informar mediante documento escrito que medidas han tomado dentro de su organización para que realicen un acompañamiento imparcial sobre el caso y por consiguiente realizar un seguimiento interno a la señora Viviana Palacios al ser involucrados sus familiares en atentados en contra de la mujer, teniendo en cuenta que ella debe propender a la protección de los derechos de las mujeres.

8. Exijo que públicamente la “veeduría por la dignidad de la mujer granadina” al encontrarse realizando un mal proceder en contra de mi integridad moral y social, se retracten de las acusaciones emitidas ante la Alcaldía de Granada Meta, Secretaria de la Mujer e Inclusión Social de Granada, secretaria de la Mujer, la Familia y Equidad de Género de la Gobernación del Meta, Defensoría del Pueblo, Procuraduría general de la Nación.

9. Por ultimo solicitar a la “veeduría por la dignidad de las mujeres granadinas” sus documentos donde acrediten ser una entidad legalmente constituida, tenido en cuenta el artículo 14 de la ley 850 de 2003. “

Producto de lo anterior, se evidencia el recibido de la misma el 4 de mayo de 2021, por la señora Silvia.

Una vez radicada la presente acción constitucional, el despacho procede avocar el trámite de tutela y notificar a la entidad accionada en debida forma por medio del correo electrónico aportado por la accionante y verificado por medio de llamada



telefónica realizada a la señora Ana Silvia Loaiza Gómez, Representante Legal de la Veeduría por la dignidad de las mujeres Granadinas: veeduriamujeresgranda@gmail.com – anasilviaLoaiza8@gmail.com, sin que a la fecha se hubiera obtenido respuesta alguna frente al presente trámite constitucional.

En ese orden de ideas concluye el despacho que en cuanto a la **presunción de veracidad en materia de tutela cuando la autoridad demandada no rinde el informe solicitado por el juez constitucional**, se tendrán por cierto los hechos narrados por el accionante.

En consecuencia, se tutelaré el derecho fundamental de petición de la señora Leidy Maritza Martínez Bohórquez, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, anteriormente citado; y se ordenará a la Representante Legal de la Veeduría por la dignidad de las mujeres Granadinas, que dentro del término de cuarentaiocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta decisión, entregue una respuesta, clara, concreta y de fondo a la petición elevada por la accionante el 04 de mayo de 2021.

Por último, se dispondrá que para el caso de no ser impugnado el presente fallo de tutela se envíe a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

En mérito de lo precedentemente expuesto, el **JUZGADO SEGUNDO PROMISCO MUNICIPAL DE GRANADA, META**, administrando justicia en nombre de la República, la Constitución y la Ley,

RESUELVE.

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición de la señora **Leidy Maritza Martínez Bohórquez**, vulnerado por la señora **ANA SILVIA LOAIZA GOMEZ** Representante Legal de la **VEEDURIA POR LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES GRANADINAS**, teniendo en cuenta las consideraciones de orden legal y jurisprudencial expuestas en la parte motiva de la presente decisión.

SEGUNDO: ORDENAR a la representante legal de la **VEEDURIA POR LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES GRANADINAS**, que dentro del término de cuarentaiocho (48), contados a partir de la notificación de esta decisión, entregue respuesta clara, concreta y de fondo a la petición elevada por la accionante el 04 de mayo de 2021.

TERCERO: De conformidad con los artículos 30 y 31 del Decreto 2591 de 1991, notifíquese en legal forma la presente decisión.

CUARTO: Este fallo de tutela podrá ser impugnado sin perjuicio de su cumplimiento inmediato como lo estipula el artículo 31 ídem, y de no ser impugnado, se remitirá el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO: Por secretaria notifíquese esta decisión a las partes, la cual se realizará a través de correo electrónico, en atención a las políticas de seguridad y las medidas adoptadas tanto por el Gobierno Nacional, como del Consejo Superior de la Judicatura,



en aras de evitar un posible contagio del virus COVID 19. Dejando las constancias visibles del recibido de los destinatarios, las cuales deben anexarse al expediente

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LILIAN YANETH NUÑEZ GAONA
Juez Segundo Promiscuo Municipal de Granada Meta